



presente reclamo, esta última sociedad no contaba con la documentación de ventas aún, razón por la que se solicitó a \_\_\_\_\_, siguiera facturando y es por eso que la factura de compraventa del vehículo que dio origen al presente procedimiento, fue emitida por \_\_\_\_\_, pero que la responsable de dicha venta era \_\_\_\_\_, razón por la que solicitaron se tuviera exenta de responsabilidad por la venta y mal servicio a la sociedad denunciada.

## VI. SOBRESEIMIENTO

Previo a realizar un análisis de fondo, este Tribunal advierte que mediante resolución de 08:31 horas del día 01/10/2018 se ordenó librar oficio al Registro Público de Vehículos Automotores (folio 102), solicitando la certificación del documento de compraventa del vehículo objeto del presente reclamo, el cual fue remitido por el jefe de dicho Registro (folios 120 a 122), además de toda la documentación vinculada al vehículo desde su importación hasta su última compraventa (folios 110 a 196). Posteriormente, la sociedad denunciante, manifestó mediante escrito presentado por su apoderado general judicial que deseaba desistir del presente procedimiento administrativo sancionatorio (folio 198). En virtud de la documentación antes descrita y que ha sido incorporada al presente expediente, resulta necesario realizar las siguientes consideraciones:

A. Respecto del escrito presentado por el apoderado de la denunciante, se debe aclarar que el desistimiento es un acto jurídico unilateral, una declaración de voluntad que produce determinados efectos jurídico-procesales. El desistimiento emana de una de las partes que intervienen en un proceso o procedimiento; y, se exige a veces la aceptación de la parte contraria, en determinados momentos procesales, como ocurre en los procesos civiles y mercantiles una vez que ha sido emplazado el demandado (art. 130 del Código Procesal Civil y Mercantil). Pero, el hecho de que sea necesaria la aceptación no es una condición de validez, sino un requisito para que produzca sus efectos normales dentro del proceso o procedimiento concreto en tramitación en el cual tiene lugar. Los efectos del desistimiento son estrictamente jurídico-procesales, y no es equivale a la renuncia del derecho subjetivo que constituye el fundamento de una pretensión.

En tal sentido, el desistimiento se da en sentido estricto cuando el demandante renuncia a la pretensión deducida en un proceso. Por ello, se considera que, al desistir del proceso, el único efecto que se produce es darlo por terminado. \_\_\_\_\_, Manual de Derecho Procesal Administrativo, pág. 383 y siguientes). La figura del desistimiento de la denuncia, como potestad del consumidor, está contemplada en el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Protección al Consumidor—en adelante RLPC—, en el capítulo II del Título VI referido a los medios alternos de solución de conflictos, el cual establece que una vez interpuesta una denuncia ante el Centro de Solución de Controversias, el interesado puede desistir de la misma, hasta antes de que se hubiera emitido la certificación correspondiente para dar inicio al procedimiento sancionatorio. Tal disposición, permite entonces que los consumidores puedan disponer de su pretensión particular de solucionar un conflicto con un

proveedor por medios alternos.

Pero, cuando ya es recibida la certificación de la denuncia en el Tribunal Sancionador se ha activado la acción punitiva del Estado, de la cual no puede disponer ningún consumidor, por lo que su desistimiento no puede provocar por sí solo la terminación anticipada del procedimiento administrativo sancionador. Para el caso, a la fecha que el apoderado de la denunciante presentó el escrito de desistimiento ya se había certificado de la denuncia por el Centro de Solución de Controversias a este Tribunal y ya se había dado inicio al procedimiento sancionatorio de mérito. Por tal circunstancia, el desistimiento manifestado por la denunciante resulta extemporáneo, para los efectos jurídicos procesales previstos en la LPC y debe declararse *sin lugar* el desistimiento solicitado por la denunciante.

**B.** Los apoderados de la denunciada manifestaron que \_\_\_\_\_, no tenía ninguna responsabilidad en la venta del vehículo objeto del reclamo, lo cual no es cierto, pues el comprobante de crédito fiscal de la compraventa del mismo fue emitido por la sociedad denunciada (folio 19) el día 16/4/2009. Aunado a lo anterior, en el contrato de compraventa de fecha 17/4/2009 que coincide con todos los datos y características del vehículo objeto de la denuncia y que aparecen en el comprobante de crédito fiscal antes citado, se consigna como vendedora del mismo vehículo a \_\_\_\_\_, y como compradora a \_\_\_\_\_. (folios 120 a 122).

Con la documentación anterior se ha desvirtuado completamente el alegato vertido por la sociedad denunciada respecto que no había sido ella quien realizó la venta del vehículo, pues se tiene plena certeza que \_\_\_\_\_, importó el vehículo (folios 111 y 113), emitió un comprobante de crédito fiscal por la compra del mismo (folio 19) y suscribió por medio de sus apoderados, el instrumento de compraventa de dicho vehículo (folios 120 a 122), con lo que se concluye que era falso el argumento de la proveedora al afirmar que no era la responsable por la venta ni por la garantía del vehículo por el que se ha reclamado, de manera que

\_\_\_\_\_ sí es la legitimada en el presente procedimiento administrativo sancionatorio.

**C.** Con fundamento en los mismos documentos antes relacionados, se acredita la existencia de una relación de consumo entre la proveedora y la denunciante, en virtud de la compraventa de un vehículo automotor, la cual se suscitó en fecha 16/04/2009 –según fecha de comprobante de crédito fiscal (folio 19)–, y que fue perfeccionada el 17/04/2009 con el respectivo contrato de compraventa (folio 120 a 122). No obstante lo anterior, la denuncia fue interpuesta por \_\_\_\_\_ mediante su apoderado el día 26/07/2013, fecha a la que el vehículo objeto del presente reclamo, ya no era propiedad de la sociedad denunciante, pues según consta en documentos de compraventa y registrales (folios 134 a 183), el vehículo por el que pretendía reclamar la denunciante, había sido vendido por la misma desde el día 30/09/2009, es decir que al momento de interposición de la denuncia ya habían pasado 3 años y casi 10 meses desde que \_\_\_\_\_ ya no era la propietaria del vehículo objeto de su reclamo, sino otra sociedad según consta en documentación remitida por el

Registro Público de Vehículos Automotores (folios 134 a 183).

En consecuencia, \_\_\_\_\_ ya no estaba legitimada para interponer la denuncia y mucho menos para comparecer en el presente procedimiento administrativo sancionatorio, en virtud de hechos suscitados en un bien, que como se ha establecido con toda la documentación antes citada, ya no era de su propiedad. Tomando en cuenta lo anterior y conforme a lo estipulado en el artículo 94 del Reglamento de la LPC, correspondería entonces declarar improponible la denuncia interpuesta por \_\_\_\_\_, por su falta de legitimación activa. No obstante lo anterior y considerando la etapa procedimental en la que se encuentra el presente caso –resolución final–, es procedente conforme a toda la documentación analizada y por los motivos ya expuestos, *sobreseer definitivamente* a \_\_\_\_\_ respecto de los hechos denunciados por \_\_\_\_\_

**VII. DECISIÓN**

Por las razones antes expuestas, y sobre base de los artículos 101 inciso segundo de la Constitución de la República, artículo 83 letra b) de la Ley de Protección al Consumidor, artículos 75 y 94 del Reglamento de la Ley de Protección al Consumidor y artículos 130, 216, 217 y 218 del Código Procesal Civil y Mercantil, este Tribunal **RESUELVE**:

- a) *Declarar sin lugar* la solicitud de desistimiento manifestada por el apoderado general judicial de \_\_\_\_\_ por los motivos antes expuestos.
- b) *Sobreseer a* \_\_\_\_\_ respecto de los hechos denunciados por la falta de legitimación activa de la sociedad denunciante.  
*Notifíquese.*


**INFORMACIÓN SOBRE RECURSO**

Recurso procedente: Revocatoria	Plazo para interponerlo: tres días hábiles posteriores a la notificación de la presente resolución
Lugar de presentación: Oficinas Tribunal Sancionador, 7ª Calle Poniente y Pasaje "D" #5143, Colonia Escalón, San Salvador.	
Autoridad competente: Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor	

**PRONUNCIADA POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL SANCIONADOR DE LA DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR.**

  
Claudia Marina Góchez Castillo  
Presidente

  
Mario Antonio Escobar Castaneda  
Primer vocal

  
Óscar Gilberto Canjura Zelaya  
Segundo vocal

  
Secretario del Tribunal